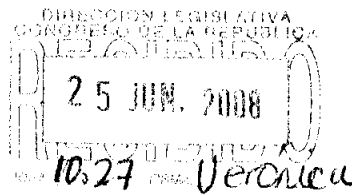




*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*



-000074-

DICTAMEN No. 06-2008

INICIATIVAS 3755 y 3768

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

HONORABLE PLENO:

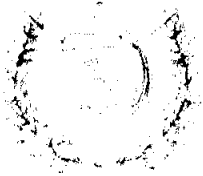
ANTECEDENTES

Con fechas 26 de febrero y 26 de marzo dos mil ocho el Honorable Pleno del Congreso de la República remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales las iniciativas 3755 y 3768 que disponen aprobar una ley en materia de acceso a la información pública para garantizar de manera plena los derechos fundamentales relacionados con esta materia en la Constitución Política de la República de Guatemala, iniciativa 3755, presentada por los Congresistas Nineth Varenca Montenegro Cottom, Armando Enrique Sánchez Gómez, Otilia Lux García, y Rodolfo Aníbal García Hernández, y la iniciativa 3768 presentada por la Parlamentaria Rosa María Ángel Madrid de Frade.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Las iniciativas tienen como objetivo fundamental desarrollar preceptos legales que protejan y hagan efectivo el derecho de todas las personas de acceso a la información pública sin mas limitantes que las establecidas por la Constitución,

Las iniciativas coinciden en sus objetivos principales y si bien difieren en cuanto a procedimientos y algunos conceptos, fue posible unificarlas por la voluntad de las propias legisladoras, quienes luego de ser escuchadas por la Comisión, presentaron una propuesta común, la que inmediatamente fue sometida a conocimiento y análisis de los integrantes de la sala legislativa.



-000075-

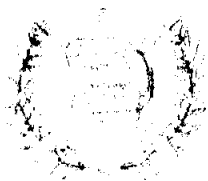
*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Es prudente hacer ver al pleno del Congreso que se recibió la opinión de expertos connotados en la materia, así como se realizó un estudio comparativo de la legislación existente en muchos países.

La propuesta unificada en resumen contiene los aspectos que adelante se detallan así como las consideraciones que sobre ellos se realizó en la Comisión, a saber:

1. Objeto de la ley, definiendo como tal garantizar el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la máxima publicidad en los actos administrativos, la transparencia de los actos públicos y manejo de recursos del Estado.
2. Los principios de la ley, de máxima publicidad, gratuidad del acceso a la información y por sobre todo el principio de que **toda persona individual o jurídica, dependencia directa del Estado, desconcentrada, descentralizada o autónoma, o de cualquier otra naturaleza que use, utilice o administre fondos públicos, esta obligada por esta ley que se propone.**
3. Define la ley los sujetos activo y obligado, dentro de la relación derecho-obligación que se establece, proponiéndose una lista de organismos, instituciones y dependencias que están obligados, pero sin que la enumeración provoque una exclusión, reafirmandose el principio resaltado en el párrafo anterior.
4. Como garantía tanto para sujetos activos como obligados se establece el principio de primacía constitucional y a efecto de conseguir un mejor manejo y aplicación de la ley por los ciudadanos se definen los conceptos que se usan en la redacción de la propuesta de ley.
5. La propuesta unificada producida en el seno de la comisión por las legisladoras ponentes, define también la información de oficio que los sujetos obligados deben mantener disponible y actualizada, desarrolla en otros artículos la clase de información que por razón de la materia deben rendir algunos de esos sujetos obligados.

2



-000076-

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

B

[Firma]

6. Se incluye también regulaciones sobre el derecho de acceso a la información y la creación de las unidades de información pública en cada sujeto obligado
7. La propuesta y el trabajo efectuado por la comisión define también con una gradación muy clara los conceptos información pública, información reservada e información confidencial, el periodo de reserva y la prueba de daño que se hace necesario regular en este tipo de legislación y lo que esta acorde a la mayoría de normas en el mundo.
8. El principio, derecho y garantía de Habeas Data queda expresamente regulado, así como lo relacionado con los archivos públicos.
9. Las iniciativas y la propuesta unificada establecen también el procedimiento para de manera sencilla y ágil, acceder a la información pública, el tiempo de respuesta, la afirmativa ficta, la gratuidad en la información y el costo de reproducción.
10. Se establece también el órgano rector o regulador para el buen ejercicio y eficacia de la ley y del acceso a la información pública, la necesidad de crear una cultura de transparencia, y los recursos a los que se puede acudir en caso de negativa de aplicación de la ley y finalmente los delitos y sanciones en que se incurre por el incumplimiento.
11. La propuesta concluye con los recursos que deben asignarse para garantizar la viabilidad de la ley y la vigencia de la misma.

**CONSIDERACIONES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo segundo que "es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona"



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

-000077-

B

Al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y referido a los aspectos de Constitucionalidad, oportunidad y conveniencia, la Comisión procedió a estudiar la propuesta la cual está en consonancia con lo dispuesto en los artículos 24 Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, 28 Derecho de Petición, 29 Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, 30 publicidad de los actos administrativos, 31 Acceso a archivos y registros estatales, 44 Derechos inherentes a la persona humana, 46 Preeminencia del Derecho Internacional, de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, y en general con el espíritu humanista y de protección a la persona frente al Estado, de la Carta Magna.

De igual manera la propuesta general y de las hechas por los integrantes de la Comisión, sufrió un análisis comparativo con la Convención Americana de los Derechos Humanos, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto de Derecho Civiles y Políticos, y otras declaraciones e instrumentos jurídicos, incluyéndose por supuesto las interpretaciones y aplicaciones hechas con respecto a este derecho por la Corte de Constitucionalidad de nuestro país.

**DE LAS CONSIDERACIONES DE LA COMISION, DEL ESTUDIO DE DERECHO
COMPARADO Y ELEMENTOS DE LA PROPUESTA DE LEY DE ACCESO A LA
INFORMACION.**

La comisión por medios electrónicos logro establecer la situación de las leyes que en esta materia de manera similar a la propuesta o bien en forma diferente por el tipo de sistema legal, pero con el común denominador de garantizar a todas las personas el acceso a aquella información que les es necesaria para que la administración publica pueda ser auditada convenientemente por quienes la sostienen se encuentran vigentes en el mundo, así como los elementos necesarios y comunes a estos instrumentos legales, consiguiendo de esa manera aprovechar aquellos aspectos y experiencias de otros sistemas y países..

La Comisión considera como hecho fundamental que solamente la vigencia plena de todos los derechos humanos garantizados por la Constitución, puede llevarnos a establecer y disfrutar de un Estado de derecho y de una democracia real.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

-000078-

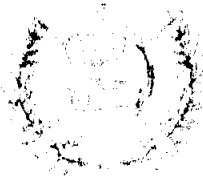
El Derecho o facultad de toda persona para acceder a los archivos, registros, expedientes, y en general todo tipo de información en manos de la administración pública, así como de los sujetos que manejen fondos provenientes del Estado cualquiera que sea su categoría o status legal, respetando las excepciones que establece el Texto constitucional, es una base sólida para conseguir la rectitud, eficiencia y transparencia en la gestión pública y en el manejo de recursos.

El acceder a la información necesaria y útil para la vida de cada persona o el conocer los datos que la administración pública tiene sobre cada uno de nosotros, posibilita realmente garantizar la libertad y seguridad necesaria para conseguir no solo el bien común, sino también el desarrollo integral definidos como fines del Estado en la Carta Magna.

La protección de la persona como sujeto y fin del orden social, requiere del Estado desarrollar los enunciados constitucionales a efecto de no permitir el exceso de discrecionalidad que conduce a la arbitrariedad y abuso del poder. Las leyes como mecanismo para desarrollar las garantías constitucionales se hacen necesarias para fortalecer el proceso democrático, permiten el gobierno de las mayorías con reglas apegadas a la moral, la ética, la honradez, la eficiencia administrar el país en forma correcta y permiten a las minorías mecanismos de fiscalización y seguimiento de las conductas y acciones de los poderes del Estado.

El texto aprobado por la **COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**, tiene dentro de otros los elementos que se consideran esenciales para una ley de esta naturaleza, elementos que de manera somera, se detallan a continuación:

1. **El sujeto obligado**, que en términos generales es aquel que ejerce gasto público por cualquier concepto.
2. **Catalogo de Sujetos Obligados**: detallados de acuerdo a los Organismos y dependencias del Estado, sin que la lista enunciada signifique exclusión de aquellos que no estando expresamente mencionados manejen fondos del estado.
3. **Sujeto activo**, la persona que tiene derecho a solicitar la información o acceder a la misma.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

-000079-

4. **Sujeto pasivo:** aquel que de acuerdo a la petición del sujeto activo y de lo dispuesto en las leyes del país esta obligado a rendir la información.
5. **Definiciones:** necesarias para una clara y precisa aplicación y ejercicio de la ley de la materia.
6. **Interpretación:** las reglas de interpretación acordes al texto constitucional y de acuerdo a la primacía legislativa fijada por la Carta Magna.
7. **Información de oficio:** aquella información todo sujeto obligado y sujeto pasivo deben mantener para consulta inmediata y sin requisitos formales por quien este interesado en ella.
8. **Promoción de la transparencia:** la necesidad de divulgar y crear una forma de conducta recta por gobernantes y gobernados para combatir la información secreta no autorizada, la corrupción y los pasajes oscuros en la actividad gubernamental.
9. **Los límites o excepciones:** define los límites o las excepciones que en razón del Texto Constitucional o de leyes especiales o tratados y convenios internacionales deben considerarse.
10. **Información confidencial:** la establecida por la Constitución y que así debe considerarse.
11. **Información reservada,** que es aquella que por razones de seguridad nacional debe mantenerse en reserva por la materia y por el tiempo que establezca la ley.
12. **Máxima publicidad,** constituida por la regla o principio de que todo sujeto obligado debe poner a disposición la información que tenga en su poder.
13. **Prueba de daño,** principio que permite no proporcionar la información si esta prevista en las excepciones, si puede afectar el interés público o si revelar la información puede provocar mayor daño público que el beneficio pretendido.
14. **Gratuidad** del proceso de acceso y limitación del costo de reproducción.
15. **El periodo de reserva** de la información clasificada como tal.
16. **La forma sencilla de las solicitudes,** el tiempo de respuesta, la prorrogas excepcional de ese periodo, la afirmativa ficta para el caso de negativas infundadas y las vías de impugnación.
17. **El control de la ley** con las responsabilidades y sanciones.
18. **El presupuesto** adecuado para hacer ágil, efectiva y positiva la ley.
19. **Su ámbito temporal y vigencia de la ley.**

6

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

En armonía con las obligaciones que el Estado de Guatemala adquiere por lo normado en la Constitución y al suscribir convenios y tratados internacionales, la iniciativa de mérito no solamente pretende cumplir con las mismas, sino dar al Estado de Guatemala y a su gobierno una herramienta legal que permita combatir con eficiencia el grave problema de la corrupción, la falta de transparencia, y permitir el manejo adecuado de la cosa pública y sus recursos, brindando a todas las personas elementos que contribuyan a su seguridad, a la justicia y a la paz de la sociedad.

En consecuencia con las modificaciones hechas a la propuesta original y que fueron consultadas con los diputados ponentes, se emite el siguiente,

DICTAMEN

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a las iniciativas **3755 y 3768** que contienen la propuesta de una **LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** por ser Proyecto de Decreto viable, oportuno, conveniente y Constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día lunes veintitrés de junio de dos mil ocho.

Oliverio García Rodas
Oliverio García Rodas
Presidente

Roberto Ricardo Villate Villatoro
Roberto Ricardo Villate Villatoro
Vicepresidente

José Alberto Gándara Torrebiarte
José Alberto Gándara Torrebiarte
Secretario

Rosa María Angel Madrid de Frade
Rosa María Angel Madrid de Frade

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



Héctor Alfredo Nuila Ericastilla



Francisco José Contreras Contreras



Rodolfo Aníbal García Hernández



Cesar Augustó Del Águila López



José Roberto Alejos Cambara



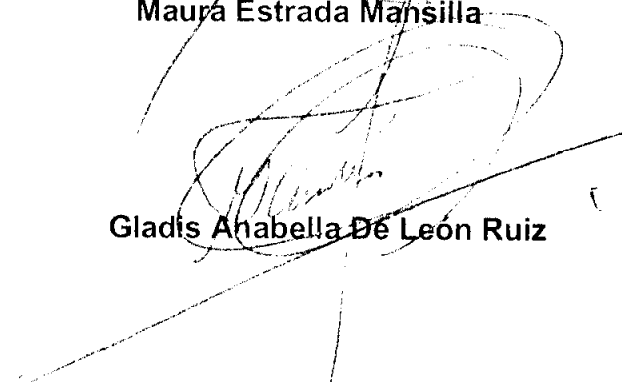
Carlos Valentín Gramajo Maldonado



Maura Estrada Mansilla



Jorge Mario Barrios Falla



Gladis Anabella De León Ruiz



Carlos Enrique Bautista Godínez



Ronnie Danilo Escobar



DECRETO No. _____

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la Republica de Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organizándose para que esta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos.

CONSIDERANDO:

Que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo, que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo el que la delega para su ejercicio a los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley.

CONSIDERANDO:

Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional.

CONSIDERANDO:

Que para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidenciales y reservada, para que esta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna.

CONSIDERANDO:

Que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base en el Texto Constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario emitir una ley que desarrollando esos derechos defina los principios, objetivos, procedimientos y en



general aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y a su participación dentro de la auditoría social y fiscalización ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos, instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala.

POR TANTO:

En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TITULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto:

1. Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a acceder a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente Ley;
2. Garantizar a toda persona el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de sus actualizaciones.
3. Garantizar la transparencia de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a acceder libremente a la información pública;
4. Establecer como obligatorio el principio de Máxima Publicidad y transparencia en la gestión pública;
5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública;



6. Favorecer la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la función pública para el fortalecimiento de la democracia;

Artículo 2. Principios. Esta ley se basa en los principios de máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad de procedimiento.

Artículo 3. Sujeto activo. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, acceder y recibir la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta Ley.

Artículo 4. Sujetos Obligados. Es toda persona individual o jurídica, institución o entidad del estado, los organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general, que esté obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:

1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran;
3. Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran;
4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
5. Corte de Constitucionalidad;
6. Tribunal Supremo Electoral;
7. Contraloría General de Cuentas;
8. Ministerio Público;
9. Procuraduría General de la Nación;
10. Procurador de los Derechos Humanos
11. Instituto de la Defensa Pública Penal;
12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala;
13. Registro Nacional de las Personas;
14. Instituto de Fomento Municipal;



15. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
16. Instituto de Previsión Militar;
17. Gobernaciones Departamentales;
18. Municipalidades;
19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
20. Banco de Guatemala;
21. Junta Monetaria;
22. Superintendencia de Bancos;
23. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Federaciones y Asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran;
24. Comité Olímpico Guatemalteco;
25. Universidad de San Carlos de Guatemala;
26. Superintendencia de Administración Tributaria
27. Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala;
28. Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima;
29. Superintendencia de Telecomunicaciones;
30. Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas;
31. Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones que reciban administren o ejecuten fondos públicos;
32. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado;
33. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado;
34. Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban manejen o administren fondos o recursos públicos;



35. Fideicomisos que se constituyan o administren con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la República Guatemala.
36. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares.

Artículo 5. Actualización de Información. Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de producirse un cambio.

Artículo 6. Interpretación. La interpretación de la presente ley se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad.

Las disposiciones de esta ley se interpretarán de manera de procurar la adecuada protección de los derechos en ella reconocidos y el funcionamiento eficaz de sus garantías y defensas.

Artículo 7. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. **Datos Personales Sensibles:** Los que corresponden a un particular en lo referente al credo, religión, origen étnico, preferencias sexuales, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, salud física y mental, situación moral y familiar y otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
2. **Derecho de Acceso a la Información Pública:** La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma.
3. **Hábeas Data:** Es el derecho que protege cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona física o jurídica. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de hábeas data o protección de datos personales de la presente ley.
4. **Información Confidencial:** Es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad.
5. **Información Pública.** Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios.

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual electrónico, informático u holográfico. y que no sea confidencial ni estar clasificada como temporalmente reservada.

6. **Información Reservada:** Es la información publica cuyo acceso se encuentra temporalmente restringida por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 8. Información Pública de Oficio. Los Sujetos Obligados, deberán mantener actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:

1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo;
2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman;
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados;
4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto;
5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos;
6. Manuales de Procedimientos, tanto administrativos como operativos;
7. La información sobre el Presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas;
8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades tanto operativas como administrativas de la entidad;
9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos, y donaciones.
10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios



- correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
 12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos tanto de boletos aéreos como de viáticos;
 13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones;
 14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor;
 15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos;
 16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado;
 17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas;
 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra y contenido del contrato correspondiente;
 19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos;
 20. Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo;
 21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso;
 22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados;
 23. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas conforme a los períodos de revisión correspondientes;

24. En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos;
25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos;
26. El modelo propuesto por el Procurador de Derechos Humanos para la solicitud de acceso a información pública para que cualquier persona pueda solicitar información, así como la dirección, teléfono, correo electrónico y enlace para este trámite;
27. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través de los medios de comunicación social, un informe sobre: el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo;
28. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley;
29. Los índices de archivos que contengan datos personales de acuerdo a esta ley;
30. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevante para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

Artículo 9. Información Pública de Oficio del Organismo Judicial. El Organismo Judicial, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente:

1. Las sentencias condenatorias dictadas por delitos de derechos humanos y lesa humanidad;
2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada, por delitos en caso de manejo de fondos públicos;
3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos;

Artículo 10. Información Pública de Oficio del Organismo Legislativo. El Congreso de la República de Guatemala, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínima la siguiente:

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo, bancada, comisión y Diputado;
2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos bancadas, comisiones y Diputados con sus respectivas remuneraciones;
3. La orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en el pleno y comisiones con veinticuatro horas de anticipación;
4. Las iniciativas de ley;
5. Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre los proyectos de ley;
6. Los decretos;
7. Los acuerdos;

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales se cobrará el valor de los mismos.

Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se regulará conforme a la Ley del Organismo Judicial.

CAPÍTULO CUARTO DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 16. Unidades de Información Pública. El titular de cada Sujeto Obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.

Artículo 17. Obligaciones de las Unidades de Información Pública. Las Unidades de Información tendrán a su cargo:

1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;
2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública;
3. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa;
4. Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en la materia; y
6. Las demás obligaciones que señale esta ley.

CAPÍTULO QUINTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA

Artículo 18. Límites del derecho de acceso a la información. El acceso a la información pública será limitado de acuerdo a lo establecido en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial y la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley.

Artículo 19. Información Confidencial. Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente:

1. La expresamente definida en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial.

3. Los datos personales sensibles, que solo podrá ser conocida por el titular del derecho.
4. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo promesa de confidencialidad.

El fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las partes de la información que no fueren consideradas como confidencial.

Artículo 20. Información Reservada. Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente:

1. Cuando se tratare de información cuya difusión comprometiere la seguridad Nacional, se tratare de información militar que pudiere afectar la estabilidad del Estado o las relaciones diplomáticas de la República de Guatemala. Esta información deberá ser clasificada como reservada por el procedimiento establecido en la presente ley;
2. La información relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los Convenios o Tratados Internacionales ratificados por Guatemala y demás leyes de la materia;
3. Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia civil o la impartición de justicia.
4. La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley.

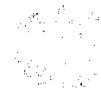
Artículo 21. Excepción de Clasificación. En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad.

Artículo 22. Clasificación de la información. La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado la que debe ser publicada en el Diario Oficial y debe indicar lo siguiente:

1. La fuente de la información;
2. El fundamento por el cual se clasifica;
3. Las partes de los documentos que se reservan;
4. El plazo de reserva; y
5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación.

Son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 23. Prueba de daño. En caso que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos:



1. Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley;
2. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y
3. Que el daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Artículo 24. Período de reserva. La información pública clasificada como reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho carácter cuando ocurriere alguna de estas situaciones:

1. Que hubieren transcurrido siete años contados a partir de la fecha de su clasificación como reservada;
2. Dejen de existir los elementos que fundamentaron su clasificación como información pública reservada; o
3. Por resolución de la autoridad judicial competente.

Artículo 25. Ampliación del Período de Reserva. Cuando subsistieren las causas que hubieren dado origen a la clasificación de información reservada, de conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán solicitar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la ampliación del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda exceder de doce años el tiempo total de clasificación.

Artículo 26. Orden Judicial. La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, mediante orden judicial, siempre que esta sea indispensable y necesaria en un proceso judicial.

CAPÍTULO SEXTO HABEAS DATA

Artículo 27. Hábeas Data. Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos;
2. Manejar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
3. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento;
4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos activos no podrán usar la información obtenida para fines comerciales.

Artículo 28. Consentimiento expreso. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia la información. El Estado vigilará que en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se incurra en ningún momento en vicio de la voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente las consecuencias de sus actos.

Artículo 29. Excepción del consentimiento. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

1. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;
2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades del Estado, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;
3. Cuando exista una orden judicial; y
4. Los establecidos en esta Ley.
5. En los demás casos que establezcan las leyes.

En ningún caso se podrán crear bancos de datos o archivos con datos personales sensibles de las personas

Artículo 30. Acceso a los datos personales. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los titulares de la información o sus representantes podrán solicitarla, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que estén contenidos en su sistema de información. Esta Información debe ser entregada por el Sujeto Obligado dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, o bien de la misma forma, debe comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

Artículo 31. Tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, que modifiquen sus datos personales contenidos en cualquier sistema de información. Con tal propósito, el interesado debe entregar una solicitud de modificaciones, en la que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones que desea realizar y aporte la documentación que motive su petición. Esta debe entregar al solicitante, en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundamentada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 32. Denegación expresa. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso de revisión previsto en esta ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO ARCHIVOS PÚBLICOS

Artículo 33. Salvaguarda de documentos. La información pública localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse, alterarse, modificarse, mutilarse u ocultarse por determinación de los servidores públicos que la produzcan, procesen, administren, archiven y resguardan, salvo que los actos en ese sentido formaren parte del ejercicio de la función pública y estuvieren jurídicamente justificados, el incumplimiento de esta norma será sancionado de conformidad con la esta ley y demás leyes aplicables.

Artículo 34. Archivos Administrativos. Con relación a la información, documentos y expedientes que formen parte de los archivos administrativos no podrán en ningún caso ser destruidos, alterados o modificados. Los servidores públicos que incumplan el presente y el anterior artículo de esta Ley podrán ser destituidos de su cargo y sujetos de a lo previsto por los artículos 418 y 419 del código penal vigente. Si se trata de particulares quienes coadyuven, provoquen o inciten, directa o indirectamente a la destrucción, alteración o modificación de archivos históricos, aplicará el delito de depredación del patrimonio nacional, regulado en el Código Penal.

TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 35. Procedimiento de acceso a la información pública. El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, telefónica, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de Información. El modelo de solicitud de información será adoptado voluntariamente y tendrá el propósito de facilitar el acceso a la información pública, pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de acceso a la información pública.

La persona que reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a quien corresponda.

Artículo 36. Sistemas electrónicos. Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública sistemas de comunicación electrónicos.

Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará que la información publicada sea fidedigna y legítima.

La información publicada en los sistemas de comunicación electrónicos, deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración financiera y contable y esta deberá ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley.

Artículo 37. Respuesta en sistemas electrónicos. Los Sujetos Obligados adoptarán las medidas que permitan dotar de certeza a los informes enviados por medios remotos de comunicación. En cualquier caso conservarán constancia de las resoluciones originales.

Artículo 38. Solicitud de Información. Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los siguientes datos:

1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirige;
2. Nombres y apellidos; e
3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita.

El procedimiento de acceso a la información no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a presenciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información a los sujetos obligados en la forma contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes de información que pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad frente a terceros en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de los trámites correspondientes.

Artículo 39. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan:

1. Entregando la información solicitada;
2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo anterior;
3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se trate de la considerada como reservada o confidencial; o
4. Expresando la inexistencia.

Artículo 40. Prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo a que se refiere la presente ley se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley.

Artículo 41. Afirmativa ficta. Cuando la Unidad de Información no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado, ésta quedará obligada a otorgarla al interesado en un período no mayor de diez días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal.

Artículo 43. Certeza de entrega de información. A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito. En caso de ampliación del término de

respuesta establecido en la presente ley, o de negativa de la información, ésta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada.

Quienes solicitaren información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por escrito o a obtener a su elección por cualquier medio la reproducción de la misma.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

TÍTULO TERCERO DE LA INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 44. Autoridad reguladora. El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de Guatemala, estará protegido por el Procurador de Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.

Artículo 45. Facultades de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso a la información pública previstas en los artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.

Artículo 46. Informe de los Sujetos Obligados. Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. El informe deberá contener:

1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida;
2. El resultado de cada una de las solicitudes de información;
3. Sus tiempos de respuesta;
4. La cantidad de solicitudes pendientes;
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos;
6. El número de solicitudes desechadas;
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; y
8. El número de impugnaciones.

El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, los motivos y el fundamento que originaron esa resolución. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 14, literal i) de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos

Artículo 47. Informe anual de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos dentro de su informe anual ante el pleno del Congreso de la República de Guatemala, podrá informar sobre:

1. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado y su resultado;
2. El tiempo de respuesta;
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley;
4. Un diagnóstico y recomendaciones; y
5. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados.

CAPÍTULO SEGUNDO CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Artículo 48. Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho de acceso a la información pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.

Artículo 49. Capacitación. Los sujetos obligados deberán establecer programas de actualización permanente a sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información pública y sobre el derecho a la protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, talleres, seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente.

TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE REVISIÓN

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 50. Recurso de Revisión. El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Artículo 51. Autoridad Competente. La máxima autoridad de cada Sujeto Obligado será la competente para resolver los recursos de revisión interpuestos por particulares

contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, en materia de acceso a la información pública y habeas data.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

Artículo 52. Recurso de revisión en materia de acceso a la información. El solicitante a quién se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el máxima autoridad dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación.

Artículo 53. Procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión también procederá en los mismos términos cuando:

1. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;
2. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;
3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud; o
4. En caso de falta de respuesta en los términos de la presente ley. Para este efecto, a los veinte días de presentada la solicitud los requirentes podrán presentar la copia de la solicitud en el que constare la fecha de su presentación ante dicho sujeto obligado.
5. Por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada.

Artículo 54. Sencillez del procedimiento. La máxima autoridad subsanará inmediatamente las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares.

Artículo 55. Requisitos del recurso de revisión. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud;
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio, lugar o medio que señale para recibir notificaciones;
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado;
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios;
5. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y
6. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad.

Artículo 56. Procedimiento del recurso de revisión. La máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los cinco días siguientes;
2. Las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas.

Artículo 57. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. Las resoluciones de la máxima autoridad podrán:

1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información;
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada.

Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Artículo 58. Resolución del recurso de revisión. Emitida la resolución de la máxima autoridad, declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del recurrente, conminará al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto.

Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra índole.

TITULO V CAPITULO UNICO RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 59. Sistema de Sanciones. Todo funcionario público, servidor público o cualquier persona que infrinja las disposiciones de la presente ley, estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de conformidad con las disposiciones previstas en la presente ley y demás leyes aplicables.

Artículo 60. Sanciones Administrativas. Las faltas administrativas cometidas por los responsables en el cumplimiento de la presente ley serán sancionadas con despido o destitución del cargo, según la gravedad de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 61. Procedimiento Sancionatorio Administrativo. En la sustanciación y decisión del procedimiento sancionatorio administrativo, se aplicarán las normas en la materia.

Artículo 62. Comercialización de datos personales. Quien comercialice por cualquier medio, archivos de información de datos personales y personales sensibles, sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Si el autor fuere un funcionario público, la pena será de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial, que durará el doble de la pena impuesta.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la comercialización de datos personales y personales sensibles.

Artículo 63. Alteración o destrucción de información en archivos. Quien sin autorización, altere o destruya información de datos personales, en perjuicio de una persona, que se encuentren en archivos, ficheros, soportes informáticos o electrónicos de instituciones públicas, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Si el autor fuere un funcionario público, la pena será de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial, por un periodo del doble de la pena impuesta.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la alteración o destrucción de información en archivos.

Artículo 64. Retención de Información. Incurre en el delito de Retención de Información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de 50,000 a 250,000 Quetzales, dependiendo de las circunstancias del hecho que serán calificadas por el Juez competente.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información.

Artículo 65. Revelación de Información Confidencial o Reservada. El funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de ley y de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la revelación de la información confidencial o reservada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 66. Conformación de Unidades de Información. Los Sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias conformarán las Unidades de Información y actualizarán sus obligaciones de oficio dentro de los ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 67. Presupuesto. En el siguiente Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá una partida adicional para que el Procurador de Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en esta Ley.

Artículo 68. Creación de Unidades. La creación de las unidades de información de los sujetos obligados no supondrá erogaciones adicionales en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sino que deberán integrarse con los funcionarios públicos existentes.

Artículo 69. Derogación. Se derogan todas aquellas disposiciones legales reglamentarias en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 70. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los sesenta días después de su publicación en el Diario de Oficial.